

La frontera colombo-venezolana en el posacuerdo de paz ¿Una fuente de persistencia del conflicto violento?

por Dr. Luis Trejos y Viviana García Pinzón*

Los territorios de frontera en Colombia han sido uno de los principales escenarios del conflicto armado. La precaria presencia estatal y la condición de exclusión de las poblaciones que habitan en estas zonas propiciaron las condiciones y oportunidades para el surgimiento de diversos actores armados no estatales y la consolidación de economías ilegales. El accionar de los actores violentos se extendió más allá de las fronteras colombianas, de manera que el territorio de países vecinos ha sido usado como territorio de retaguardia de grupos guerrilleros, ruta de tráfico de distintos productos y fuente de captura de rentas económicas.

En un contexto marcado por la debilidad institucional del Estado, actores armados no estatales han desarrollado funciones clásicamente atribuidas al Estado y han sido proveedores de gobernanza. Este es el caso de las FARC, las cuales por décadas fungieron como la autoridad política dominante en diversos territorios fronterizos de Colombia. Las FARC no sólo se encargaron del control de la violencia, sino que además se convirtieron en fuente de provisión de condiciones políticas y económicas básicas. En el caso del territorio fronterizo de Colombia y Venezuela, la salida de las FARC como actor armado ha coincidido con la crisis institucional y humanitaria de Venezuela, lo cual ha hecho de esta zona un espacio particularmente vulnerable a la violencia y la criminalidad. Dada la precariedad en la presencia estatal en ambos lados de la frontera y la existencia de múltiples economías legales e ilegales, grupos como la guerrilla del ELN, paramilitares y agrupaciones de crimen organizado han entrado en disputa por la captura de rentas y territorios. Sin embargo, las dinámicas de confrontación no son las mismas a lo largo del territorio fronterizo. Por la complejidad de las dinámicas criminales presentes en ella y la heterogeneidad de su geografía y asentamientos humanos es necesario considerar las diferencias territoriales para lograr una mejor comprensión del conflicto violento en esta región.

Reacomodamiento de actores armados y escalamiento de la violencia: Una mirada territorial

La frontera entre Colombia y Venezuela se extiende por más de 2200 km y abarca distintas regiones y geografías, es por ello por lo que el impacto de la salida de las FARC y el reacomodamiento de otros actores armados no es homogéneo a lo largo de todo el territorio fronterizo. En este sentido, es posible diferenciar tres zonas: zona norte (departamentos de La Guajira y César), zona centro (Norte de Santander), y zona sur (Arauca, Guainía y Vichada). Esta división se basa

principalmente en la ubicación geográfica y trayectoria histórica de presencia de actores armados no estatales (guerrillas, paramilitares y grupos de crimen organizado).

En la zona norte conformada por los departamentos de La Guajira y Cesar, en el primer departamento la ilegalidad ha sido estructural, ya que debido a su desconexión con el centro del país y a sus históricas interacciones comerciales con Venezuela y algunas Antillas menores, la ilegalidad en clave de contrabando de licores, cigarrillos y electrodomésticos se hizo una práctica social legítima que abonó la llegada de la bonanza marimbera, luego el acopio y exportación de clorhidrato de cocaína y recientemente el contrabando de víveres y gasolina provenientes desde Venezuela. En el caso del Cesar, su territorio es usado como ruta de transporte de clorhidrato de cocaína proveniente desde el Catatumbo hasta las costas del Caribe colombiano. En la actualidad hacen presencia en esta zona el Clan del Golfo, el ELN y delincuencia local.

La zona centro conformada por el Norte de Santander es uno de los epicentros de la violencia en el marco del posacuerdo. En esta zona hay presencia de diversas economías tales como narcotráfico (cultivo, procesamiento y rutas de tráfico), petróleo, y extorsión. Desde la década de 1990, esta zona ha estado en disputa por parte de grupos guerrilleros y paramilitares. Tras la desmovilización de los grupos paramilitares en la primera década de 2000, grupos armados ligados a estas estructuras buscaron hacerse del control de las rentas y los territorios. La salida de las FARC y la posterior aparición de una disidencia han agudizado la disputa ya existente entre múltiples actores armados. Es por esta atomización entre múltiples grupos violentos que la zona centro presenta un escenario donde hay una gran probabilidad de que la violencia escale.

En el caso de la zona sur, se debe hacer una subdivisión, por un lado, en el departamento de Arauca a pesar de la presencia de cultivos ilícitos se aprecia un avanzado proceso de apropiación de rentas legales que se materializa en la extorsión por parte del ELN a las empresas petroleras asentadas en el territorio. Además, Arauca se configura como la puerta de entrada al territorio venezolano, país en el que el ELN ha establecido parte de su comandancia estratégica y a través del Estado Apure ha llegado hasta el Arco Minero del Orinoco, subregión en la que regula y apropia rentas provenientes de la minería legal e ilegal. En los casos de Vichada y Guainía se observa que en torno a la administración de rentas ilícitas se conformó una especie de gobernanza de la ilegalidad ya que las estructuras criminales presentes en dicho territorio (tres grupos disidentes de las desmovilizadas FARC-EP, un frente del ELN y el Bloque Libertadores del Vichada), no sólo parecen coordinar su actividad delincencial, sino que también ejercen las funciones duras del Estado, tales como brindar seguridad, administrar justicia y regular la economía local.

Una frontera, múltiples realidades y un complejo escenario de seguridad

En la frontera colombo-venezolana convergen dos realidades sumamente difíciles.

Por un lado, el proceso de paz con las FARC que ha llevado a la entrega de armas de esta guerrilla y su salida de aquellos territorios que solía controlar. Este cambio no ha tenido como correlato el fortalecimiento de la presencia estatal, por el contrario, son otros grupos armados de diversa índole los que han entrado en disputa por el control de estas zonas. Por otra parte, la aguda crisis institucional y humanitaria de Venezuela ha contribuido a hacer de esta zona un lugar propicio para el accionar de dichos actores. Es por ello por lo que ninguna política pública o medida institucional que se asuma desde el lado colombiano tendiente al combate y disminución de las rentas ilícitas y la presencia de actores armados ilegales, tendrá efectos positivos si desde el lado venezolano no hay un correlato en cuanto a la percepción de amenazas comunes a la seguridad binacional y la acción conjunta. Sin embargo, el escenario actual de la relación bilateral ofrece pocas oportunidades para avanzar en una agenda de este tipo.

Entre tanto es importante que tanto el gobierno colombiano como otros actores de la sociedad civil y la comunidad internacional mantengan esfuerzos para: 1) Insistir en una salida negociada a la crisis venezolana con el fin de fortalecer la seguridad en el lado venezolano de la frontera; 2) Acompañar procesos de construcción y fortalecimiento institucional en la frontera colombiana por medio del empoderamiento de la sociedad civil, la creación de circuitos económicos legales y el fortalecimiento de las administraciones locales, y 3) Incluir a las comunidades locales en la planeación y formulación de las políticas públicas fronterizas.

* **Dr. Luis Trejos** trabaja como profesor en la Universidad del Norte en Colombia y hasta hace poco como investigador visitante en el Instituto GIGA Berlín (para Estudios Latinoamericanos) con el apoyo de la FES. Investiga el conflicto armado en Colombia, el narcotráfico y el crimen organizado. Debido a estas investigaciones sensibles, fue amenazado seriamente.

Viviana García Pinzón es estudiante de doctorado en la Universidad de Marburgo y en el Instituto GIGA Hamburgo. Fue investigadora asociada en la Universidad Nacional de Colombia e investiga los temas de la violencia en ciudades latinoamericanas y del proceso de paz en Colombia.